

AMÉRICA LATINA ¿EL ESLABÓN MÁS DÉBIL? El neoliberalismo en América Latina

El nuevo siglo arranca en América Latina con un sorprendente comienzo. El continente, que había sido un territorio privilegiado para el neoliberalismo y donde primero fue aplicado –en Chile y Bolivia–, se ha convertido rápidamente en el área privilegiada no sólo de resistencia sino de construcción de alternativas al mismo. Se trata de dos caras de la misma moneda: precisamente por haber sido el laboratorio de los experimentos neoliberales, América Latina se está enfrentando ahora a sus consecuencias. Las décadas de 1990 y 2000 han sido dos décadas radicalmente opuestas. Durante la primera, el modelo neoliberal se impuso en diversos grados en prácticamente todos los países del continente, si exceptuamos Cuba. Clinton, que ni siquiera cruzó el río Grande para firmar el primer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se vio obligado poco después a aprobar un superpréstamo de Washington cuando estalló en México la primera crisis derivada del nuevo modelo. Estados Unidos continuó presionando en pro de una Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), presentando tal iniciativa como el resultado natural de la extensión sin fisuras de las políticas de libre comercio.

En el encuentro de la Cumbre de las Américas celebrado en 2000 en Canadá, el presidente de Venezuela Hugo Chávez fue el único líder que votó contra la propuesta formulada por Clinton de una ALCA, mientras que Cardoso, Menem, Fujimori y sus colegas aceptaron dócilmente la propuesta. Con ocasión de su primera Cumbre Iberoamericana, recordaba Chávez, Castro le pasó una nota en la que había escrito: «Al fin, no soy el único diablo dando vueltas por aquí». En 2003, por consiguiente, Chávez –elegido presidente de Venezuela en 1998– asistió con cierto alivio a las investiduras de Lula en Brasilia y de Néstor Kirchner en Buenos Aires, antes de asistir a las de Tabaré Vázquez en Montevideo en 2004 y Evo Morales en La Paz en 2006 y a las de Daniel Ortega en Managua y Rafael Caldera en Quito en 2007, a las que siguió en 2008 la de Fernando Lugo en Asunción. Entretanto, la propuesta de libre comercio estadounidense, que había sido casi unánimemente aprobada en 2000, estaba muerta y enterrada en 2004. Desde esa fecha, el propio Chávez ha sido reelegido, al igual que lo fue Lula en 2006; en abril de este año, Kirchner fue sucedido por su mujer, Cristina Fernández, y Lugo triunfó en Paraguay, poniendo fin a más de 60 años de gobierno del Partido Colorado.

¿Cuál es el significado de este cambio radical, más veloz que cualquier otro experimentado por el continente hasta la fecha, que ha producido el mayor número de gobiernos progresistas, sean de izquierda o de centro-izquierda, visto en toda su historia? El continente despliega ciertamente los más altos niveles de desigualdad del mundo y un diferencial de renta agravado por la década neoliberal, pero, aun con todo, los duros golpes que castigaron a las luchas populares del pasado y la solidez del *establishment* neoliberal hicieron que la rapidez del cambio fuese realmente inesperada. En el resto del artículo, intentaremos comprender las condiciones que transformaron a América Latina en el eslabón más débil de la cadena neoliberal.

Imponer el modelo

Una precondition de la implementación de los programas de privatización impuestos en los distintos países latinoamericanos durante las décadas de 1980 y 1990 fue la derrota y el desarme de los movimientos de la izquierda y del movimiento obrero organizado previamente existentes. Durante las décadas del desarrollo la estrategia consistió en la industrialización mediante la sustitución de importaciones, en particular en México, Argentina y Brasil, pero también, aunque en menor medida, en Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Costa Rica. Esta estrategia fue sostenida por amplios proyectos político-ideológicos que estimulaban el fortalecimiento de la clase obrera y sus sindicatos, respaldados por formaciones partidistas locales y bloques democráticos-nacionales, en un contexto de ideologías e identidades nacionalistas. El potencial que encerraba todo ello se manifestó estrepitosamente como una fuerza radical en la escena política durante la década de 1960, cuando el largo ciclo de crecimiento se agotaba en torno a conflictos sobre los derechos de los trabajadores, en un momento en que el ejemplo cubano apuntaba a alternativas que trascendían los límites del capitalismo y el dominio imperial estadounidense. La respuesta a estas luchas fue una era de golpes militares, primero en Brasil y Bolivia en 1964, luego en Argentina en 1966 y 1976, y finalmente en Uruguay y Chile en 1973.

Los procesos combinados y estrechamente relacionados de dictadura militar y aplicación de modelos neoliberales actuaron conjuntamente a la hora de desencadenar una regresión extrema en el equilibrio de poder entre las clases sociales. Habría resultado imposible acometer la venta al por mayor de los recursos industriales nacionales, desplegada de modo más conspicuo en Chile, Uruguay y Argentina, sin aplastar primero la capacidad del pueblo de defender sus intereses. Estos tres países habían alcanzado éxitos notables en sus empeños, poseían sistemas avanzados de protección social gestionados por Estados que ejercían una función reguladora, y desempeñaban un papel en la expansión del mercado interno, garantizando el bienestar social de la población y la prestación de servicios públicos. Estos países experimentaron una represión brutal hasta entonces desconocida para despejar el camino a la aplicación de políticas

neoliberales, que privatizaron las funciones del Estado –en el caso de Argentina transfiriendo virtualmente todos los recursos públicos a manos del capital privado– y abolieron derechos sociales conquistados a un alto precio. En resumen, tres de los Estados más ilustrados del continente se vieron completamente desmantelados.

En el curso de la década de 1990, el neoliberalismo penetró intensamente todo el espectro político de América Latina. El programa se aplicó originalmente por la extrema derecha en el Chile de Pinochet. Encontró otros adeptos en la derecha –como Alberto Fujimori en Perú–, pero también absorbió fuerzas que históricamente habían estado asociadas al nacionalismo: el PRI en México; el peronismo en Argentina bajo el mandato de Carlos Menem, y, en Bolivia, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el partido que había encabezado la revolución nacionalista de 1952 con Víctor Paz Estensoro. Después, el neoliberalismo se apoderó de la socialdemocracia, ganando la adhesión del Partido Socialista chileno, de Acción Democrática venezolana y del Partido Socialdemócrata brasileño. Se convirtió en un sistema hegemónico en prácticamente todo el territorio de América Latina.

Sin embargo, el modelo neoliberal no logró consolidar las fuerzas sociales necesarias para su estabilización, generando la primera arremetida de crisis que refrenaría su curso. Las tres mayores economías de América Latina fueron el teatro de las crisis más espectaculares: México en 1994, Brasil en 1999 y Argentina en 2002; el programa se hundió sin cumplir sus promesas. Los estragos de la hiperinflación fueron controlados, pero ello se logró únicamente a cambio de un tremendo coste. Durante más de una década, el desarrollo económico se vio paralizado, la concentración de riqueza se incrementó más que nunca antes, los déficits públicos alcanzaron cotas estratosféricas y el grueso de la población fue testigo de la expropiación de sus derechos, fundamentalmente en el ámbito del empleo y de las relaciones laborales. Para coronar todo esto, la deuda nacional se expandió exponencialmente y las economías regionales se hicieron altamente vulnerables, expuestas sin remisión al ataque de los especuladores, como descubrieron en carne propia cada uno de estos tres países.

El pobre comportamiento del neoliberalismo en el terreno económico en América Latina fue lo que acarreó en muchos de los casos la derrota de los gobiernos que lo habían defendido. Entre éstos se cuentan Alberto Fujimori en Perú, Carlos Andrés Pérez en Venezuela y Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia; también salieron de escena el PRI en México, la alternancia de los dos partidos tradicionales en Uruguay y los políticos que intentaron perpetuar el neoliberalismo una vez que éste había colapsado, como Fernando de la Rúa en Argentina, Lucio Gutiérrez en Ecuador y Sánchez de Lozada en Bolivia. También resulta importante señalar el aislamiento de aquellos líderes que luchan para mantenerlo vivo, como Felipe Calderón en México, Michelle Bachelet en Chile, Alan García en Perú o Alfonso Uribe en Colombia. (Uribe, dicho sea de paso, perdió las recientes elecciones lo-

cales en torno a problemas suscitados por su forma de gobierno; su prestigio deriva de un despliegue sin contemplaciones de «políticas de seguridad democrática» contra el «terrorismo», una postura que le permite obtener un 80 por 100 de apoyo interno.) Un creciente número de presidentes han sido elegidos o, en algunos casos, reelegidos como respuesta al fracaso del modelo económico neoliberal.

Reveses políticos

Podemos trazar una serie de ciclos, de máximos y mínimos, de triunfos y de reveses en la política latinoamericana desde la victoria de la Revolución cubana en 1959. Su ascenso y caída se ha producido en rápida sucesión, si los comparamos con los lapsos temporales de la izquierda europea. El resultado ha sido una serie de reacomodaciones en el equilibrio de poder, que reflejan en sí mismas la prolongada crisis de hegemonía que conoció la región cuando el modelo de sustitución de importaciones que había predominado desde la crisis de 1929 finalmente agotó su potencial.

El primer ciclo, de 1959 a 1967, estuvo marcado por el triunfo de la Revolución cubana y la difusión de movimientos de guerrilla rural en Venezuela, Guatemala y Perú, en emulación de los existentes en Colombia y Nicaragua. El periodo conoció movilizaciones de masas en diversos países, entre los que se contó Brasil durante el gobierno de Goulart entre 1961-1964, así como una amplia resistencia a la dictadura que siguió al golpe militar de 1964. Para la izquierda latinoamericana, éste fue un periodo de ascenso, directamente influenciado por el éxito de Cuba, cercenado sin embargo por la muerte del Che en Bolivia en 1967. El segundo ciclo se extiende de 1967 a 1973. Durante el mismo se produjo el declive de los movimientos de guerrilla rural y el surgimiento de nuevas guerrillas urbanas en Uruguay, Brasil y Argentina. Allende fue elegido presidente de Chile (1970-1973); en esos mismos años se produjo el gobierno de Juan José Torres (1971) en Bolivia y llegaron al poder gobiernos nacionalistas en Perú con Juan Velasco Alvarado (1967) y en Panamá con Omar Torrijos (1968). En resumen, se trató de un periodo de claroscuros que inauguraba una era de retrocesos marcada por golpes militares y dictaduras.

Durante los años que median entre 1973 y 1979 se produjo la consolidación de las dictaduras militares a lo largo del Cono Sur. Como en Brasil, las Juntas llegaron al poder en Bolivia en 1971, en Chile y Uruguay en 1973, y en Argentina en 1976. Velasco Alvarado fue derrocado en Perú. El modelo neoliberal fue impuesto en el Chile de Pinochet. Se trató de un periodo de retroceso sin matices. Por el contrario, la larga década que va de 1979 a 1990 trajo la victoria de los sandinistas en Nicaragua, la revolución en Grenada y un gobierno nacionalista en Surinam. Castro fue elegido presidente del Movimiento de Países no Alineados y las fuerzas de la guerrilla se expandieron en El Salvador y Guatemala. La década de 1980 fue un periodo de claro progreso.

En otra inflexión, los años que median entre 1990 y 1998 fueron testigos de la derrota sandinista, el comienzo del «periodo especial» en Cuba y el afianzamiento de la hegemonía neoliberal en todo el continente con la colaboración del PRI en México, Menem en Argentina, Pérez en Venezuela, Cardoso en Brasil, Fujimori en Perú y la continuación del neoliberalismo económico pinochetista en Chile bajo la coalición de Concertación de socialistas y demócratacristianos. Éste fue definitivamente un periodo de neta regresión. Sin embargo, a partir de 1998, los vientos cambiaron en dirección opuesta con la elección de Chávez en Venezuela, seguido por el lanzamiento de los Foros Sociales Mundiales en Porto Alegre en 2001, la victoria electoral de Lula en 2002, y otras conquistas para la izquierda y el centro-izquierda en Argentina, Uruguay, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y finalmente Paraguay. MERCOSUR se amplió para incorporar a Venezuela, Bolivia y Ecuador, mientras la Alternativa Bolivariana para las Américas –ALBA– propició una nueva agrupación de izquierdas del eje andino-caribeño. Hasta la fecha, éste ha sido un periodo de apreciable progreso.

Esta sucesión vertiginosa de máximos y mínimos demuestra la inestabilidad del continente y sus reducidos recursos para consolidar programas alternativos; y, sin embargo, es también un signo de la asombrosa capacidad de la izquierda para recuperarse de sus derrotas con independencia de la dureza de las mismas: el asesinato del Che, el golpe de Chile, la derrota de los sandinistas, la intensificación de la presión neoliberal. Como un topo, el movimiento popular en un país ha florecido en otra parte. Excavó de sur a norte el continente, del campo a la ciudad, del discurso de la vieja izquierda a nuevas formas de expresión, de estructuras de partido a movimientos sociales más laxos, y de éstos a nuevas fuerzas ideológicas y políticas. En otras partes del mundo, derrotas de la escala experimentada aquí condujeron a largos periodos de inactividad, por ejemplo después del fracaso en Alemania e Italia tras la Primera Guerra Mundial, o el aplastamiento del republicanismo tras la Guerra Civil española.

La brevedad de los ciclos es también sorprendente: tan sólo transcurrieron tres años entre la muerte del Che y el reflujo de la primera ola guerrillera en 1967 y la elección de Allende en 1970. Entre los golpes militares de 1973 en Chile y Uruguay y el de Argentina en 1976 y la victoria de los sandinistas en 1979 transcurrieron seis y tres años respectivamente. Y desde el colapso del mundo socialista, el comienzo del «periodo especial» en Cuba, el derrocamiento del gobierno de Grenada en 1989 y el fin del régimen sandinista en 1990, pasaron tan sólo ocho o nueve años hasta la elección de Chávez. El modelo neoliberal estaba justo comenzando a echar sus raíces cuando se produjo la primera crisis en México en 1994, el año en que se firmó el ALCA y estalló la rebelión zapatista, mientras Cardoso accedía al poder en Brasil. Curiosamente, los tres ciclos suman 29 años, incluyendo la victoria de las revoluciones cubana y sandinista y los gobiernos de Allende, Chávez, Morales y Correa. Por el contrario, los periodos de retroceso computan un total de 14 años, incluyendo la muerte del Che, el golpe chileno y la derrota sandinista.

Estrategias de la izquierda

Cruzando estos ciclos políticos, podemos discernir tres estrategias globales de la izquierda latinoamericana. La primera secuencia, que se remonta a la década de 1940, consistió en una de las mayores reformas estructurales coincidente con la hegemonía del modelo de sustitución de importaciones. La izquierda optó por una alianza con sectores de la elite empresarial nacional en nombre de la modernización económica, la reforma agraria y cierta autonomía respecto al imperialismo del Norte. Esta estrategia se implementó por líderes nacionalistas legendarios tales como Getúlio Vargas de Brasil, Lázaro Cárdenas de México y Juan Domingo Perón de Argentina, en concierto con partidos de la izquierda y del centro-izquierda. En Chile, casos de manual de este planteamiento fueron el Frente Popular de 1938 y el gobierno de Allende de 1970-1973. Pero el programa falló al mismo tiempo que el esfuerzo industrializador, cuando la internacionalización de las economías empujó a las elites empresariales a sellar una sólida alianza con el capital internacional, sentando las bases para el eventual modelo neoliberal. Estos mismos empresarios apoyaron también las dictaduras militares del Cono Sur, sin ocultar su disponibilidad a liquidar el movimiento popular para conformar una economía orientada hacia las exportaciones y ligada al consumo doméstico de lujo mediante una intensa explotación del trabajo.

El gobierno de Allende, sostenido por los partidos comunista y socialista, con un programa que contemplaba la nacionalización de las 150 empresas más importantes del país, constituyó el ejemplo más avanzado del intento de lograr el paso de políticas reformistas a una superación socialista del capitalismo. Entre las múltiples razones que explican su derrota, no cabe duda de que el hecho de que Allende obtuviese en su primer mandato tan sólo el 34 por 100 de los votos y que tres años después la cuota de apoyo disfrutada por su gobierno ascendiese únicamente al 44 por 100 constituyó un obstáculo mayor para la implementación de un programa dotado de tal radicalidad. La Unidad Popular subestimó también la naturaleza de clase del Estado. No prestó suficiente atención, por consiguiente, a la necesidad de instituir un poder alternativo al margen de los aparatos tradicionales, que a la postre acorralaron y asfixiaron al poder ejecutivo. Los golpes militares chileno y uruguayo fueron ejecutados en el año que marcó la transición de un largo ciclo expansivo a uno recesivo desencadenado por la crisis del petróleo de 1973. Se había cerrado definitivamente una página de la historia y, con ella, una estrategia de la izquierda latinoamericana había concluido.

Una segunda gran estrategia emergió con la revolución cubana. Cualquier victoria revolucionaria –sobre todo cuando es la primera de su tipo en el conjunto de una región– conlleva una carismática fuerza persuasiva, como sabemos que sucedió con las experiencias rusa y china en 1917 y 1949. El triunfo cubano coincidió con el fin del ciclo de la expansión económica latinoamericana bajo los gobiernos populares y los regímenes demo-

cráticos que habían prevalecido en buena parte del continente durante las décadas de 1940 y 1950. El primer golpe argentino fue perpetrado en 1955, el segundo en 1966; los golpes brasileño y boliviano tuvieron lugar en 1964, y ya en 1954 Guatemala era aplastada por la contrarrevolución. Parecía que el ciclo de los gobiernos democráticos había finalizado su curso en paralelo con la crisis económica.

Fue entonces cuando inesperadamente Cuba presentó una ruta alternativa, en contraste con el *impasse* experimentado por las luchas populares dirigidas por las elites tradicionales en otros países. América Latina no desconocía los movimientos guerrilleros; había conocido insurgencias rurales como las de Nicaragua y El Salvador durante la década de 1930, así como luchas nacionales revolucionarias en México en la década de 1910 o en Bolivia en 1952. Sin embargo, los acontecimientos de Cuba concentraron una capacidad de atracción especial, señalando el camino hacia una nueva época para la izquierda. Debido a la similitud de los niveles de desarrollo alcanzados en ese periodo por la mayoría de los países de América Latina, la Revolución cubana ejerció de modo inmediato una influencia en la región mayor que la ejercida en su día por la Revolución rusa en Europa. Esta influencia se vio reforzada gracias al modo en que aquella fue presentada por codificaciones como la de Régis Debray –atractiva, si bien equívoca– de la experiencia cubana y sobre cómo podría replicarse ésta en otros países y continentes. Los multitudinarios congresos celebrados en Cuba –Tricontinental (1965) y OLAS (1966)– sirvieron para dotar de un poderoso impulso y dar una publicidad de alcance mundial a la nueva estrategia, que fue ejemplificada también por las actividades del Che Guevara en África y América Latina.

Las luchas guerrilleras se desplegaron en tres fases específicas durante la década siguiente. La primera, en la década de 1960, tuvo un carácter rural, con focos en Venezuela, Guatemala y Perú; finalizó con la muerte del Che en Bolivia justo en el momento en que estaba intentando coordinar éstos con otros movimientos que estaban comenzando a aparecer en Uruguay, Brasil y Argentina. La segunda fase fue la de las guerrillas urbanas en estos tres últimos países, que estuvieron activas entre finales de la década de 1960 y principios de la de 1970. La tercera fase se radicó una vez más en el campo, inspirada por la victoria de los sandinistas en 1979 y se centró a lo largo de toda la década de 1980 en Guatemala y El Salvador. La derrota electoral sandinista en 1990 coincidió con el paso a un mundo unipolar regido por la hegemonía imperial de Estados Unidos, lo cual puso fin a la viabilidad de las estrategias de guerrilla. La imposibilidad de la victoria militar en otros países forzó a los combatientes a reinsertarse en las instituciones políticas predominantes, concluyendo así básicamente los días álgidos de las estrategias guerrilleras.

Al mismo tiempo, el realineamiento global acaecido después de 1990 tuvo consecuencias de envergadura para los partidos de la izquierda tradicional, tanto nacionalistas como socialdemócratas. Su adhesión a las políticas

neoliberales y los propios efectos de éstas debilitaron a los movimientos sindicales y a una amplia gama de fuerzas de izquierda. El colapso de la URSS y del campo socialista precipitó una crisis terminal en los partidos comunistas de todo el continente. Algunos de ellos cambiaron de nombre e incluso su naturaleza, como sucedió con el Partido Comunista brasileño; otros simplemente desaparecieron, mientras que aquellos que sobrevivieron quedaron aislados social, política e ideológicamente.

El resto de fuerzas de la izquierda fue afectado de diversos modos por las nuevas condiciones. El Partido de los Trabajadores brasileño (PT), el Frente Amplio uruguayo y el Frente Sandinista nicaragüense se convirtieron en partidos de centro-izquierda, aceptando, una vez llegados al poder, los modelos económicos contra los que habían combatido desde la oposición. De los antiguos grupos guerrilleros, tan sólo el Frente Farabundo Martí de El Salvador ha logrado sobrevivir como una fuerza política significativa desde que abandonó las armas. El MIR en Chile, los Montoneros y el PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo) en Argentina, ALN (Acción Libertadora Nacional) y VPR (Vanguardia Popular Revolucionaria) en Brasil y los grupos guerrilleros activos en Perú y Venezuela se han disuelto, mientras que los Tupamaros de Uruguay se han reinventado a sí mismos como una fuerza política que no tiene relación alguna con su pasado como movimiento guerrillero.

Un tercer planteamiento

El marco global de la lucha política e ideológica en América Latina se ha visto, pues, remodelado durante la hegemonía neoliberal. La transformación radical del equilibrio de poder impuesto por las dictaduras de las décadas precedentes experimentó un ulterior fortalecimiento con el nuevo orden mundial. El abandono de las fuerzas populares por los antiguos aliados nacionalistas o socialdemócratas y las duras consecuencias sociales de los modelos económicos de libre mercado han propiciado la aparición de movimientos sociales en primera línea de la resistencia contra el neoliberalismo. Ésta es la tercera y última estrategia surgida desde abajo. Los zapatistas, el movimiento de campesinos sin tierra (MST) en Brasil, los movimientos indígenas surgidos en Bolivia y Ecuador, o los *piqueteros*, activistas desempleados en Argentina, no son sino algunos de los grupos pioneros en esta nueva militancia. Han resistido dando lo mejor de sí mientras el neoliberalismo privaba al Estado de sus funciones mediante la privatización integral de las empresas públicas y la expropiación de los derechos al empleo formal, la salud y la educación. La oposición al ALCA fue el aspecto central de la plataforma zapatista hecha pública en 1994. Los campesinos sin tierra de Brasil han protagonizado acciones contra las privatizaciones, mientras que la resistencia ante la privatización del agua en Cochabamba en 2000 constituyó el punto de partida para una notable nueva fase en la historia de la izquierda boliviana. Algo similar sucedió en Ecuador, donde los movimientos indígenas demostraron su poder de

veto contra dos gobiernos neoliberales, forzando la salida de sus dos presidentes, Abadalá Bucaram en 1997 y Jamil Mahuad en 2001. Movilizaciones posteriores, esta vez dirigidas por movimientos urbanos formados para defender los derechos de los ciudadanos, derribaron un tercer gobierno, el de Lucio Gutiérrez, en 2005.

Las dificultades experimentadas por el modelo neoliberal en México, Brasil y Argentina, combinadas con la presión de la resistencia popular al mismo, inauguraron una nueva fase, en la que el campo de la izquierda formuló alternativas urgentes en el contexto de la crisis de hegemonía que barría el continente. Esto planteó dilemas a los cuales algunos movimientos sociales respondieron positivamente, mientras otros se limitaban a retroceder. Una posición común entre estos últimos fue utilizar sus críticas de la izquierda tradicional, el Estado neoliberal y las prácticas políticas convencionales para justificar un repudio integral de los partidos, del Estado y de la política en general, refugiándose en lo que denominaron la «autonomía de los movimientos sociales». En un momento en que el neoliberalismo estaba intensificando su asalto contra el Estado para favorecer el mercado, contra la política para favorecer a la economía y contra los partidos políticos en pro de las empresas, se coló cierta ambigüedad, al hilo de la distinción establecida, entre movimientos que defendían la dimensión «social» en detrimento de la política, los partidos y los Estados, y aquellos mismos argumentos neoliberales. Surgió una nueva tendencia en el seno de la izquierda o la resistencia global al neoliberalismo concretizada en los movimientos sociales y las ONG y articulada en torno a la dicotomía de «Estado *versus* sociedad civil». El Foro Social Mundial fortaleció esta tendencia al dar la bienvenida a movimientos sociales y ONG, pero permaneciendo cerrado a los partidos políticos, sosteniendo que ese espacio pertenecía a la sociedad civil.

Dos problemas destacan en esta posición. En primer lugar, difumina los contornos respecto al discurso neoliberal, ya que, como hemos señalado anteriormente, este último contempla igualmente al Estado y a los partidos políticos como sus mayores enemigos. En segundo lugar, dado que el neoliberalismo se caracteriza por la expropiación integral de los derechos, únicamente puede superarse en la esfera política: mediante la universalización de los derechos implementada por la autoridad pública del Estado. De otro modo, la lucha contra el neoliberalismo permanecerá perpetuamente a la defensiva, habiéndose privado de los instrumentos políticos necesarios para su realización. Algunos movimientos sociales han permanecido atrapados en esta paradoja, organizando supuestamente focos de resistencia que se han mostrado incapaces, sin embargo, de llegar a desafiar la hegemonía neoliberal mediante una articulación novedosa de lo social con lo político. Su crítica del Estado se halla subordinada a las condiciones del discurso teórico del neoliberalismo, estructurado en torno a la polarización del Estado *versus* lo privado. Esta polaridad está concebida para demonizarlo, controlar la esfera privada (en la cual se hallan insertas las relaciones de mercado) y abolir el marco indispensable para proceder a la democratización y derrota del neoliberalismo: la esfera pública.

La polarización real es la que se produce entre la esfera pública y la esfera mercantil, en la que el proyecto neoliberal se halla comprometido en la extensión infinita de las relaciones de mercado, mientras que el Estado no es tanto un polo como un espacio de disputa hegemónica entre las dos esferas. La construcción de una alternativa antineoliberal debe comenzar con la reorganización o redefinición del Estado a favor de la esfera pública, universalizando los derechos de los ciudadanos al tiempo que separa el Estado y las relaciones sociales generales del mercado. Democratizar significa desmercantilizar, recuperar el terreno de los derechos del pueblo que el neoliberalismo ha puesto en manos del mercado. Limitar el campo de acción a lo «social» como algo opuesto a lo «político», proclamar la autonomía de los movimientos sociales como principio, significa condenarse a la impotencia y, a la postre, a la derrota. Los casos de Bolivia, Ecuador y Argentina proporcionan ejemplos instructivos de estas alternativas.

La Paz, Quito, Buenos Aires

En Bolivia, la nueva izquierda fue construida a partir de la crítica del economicismo ciego de la izquierda tradicional, que clasificaba a los pueblos indígenas únicamente como campesinos, dado que sus medios de subsistencia podían definirse como producción rural a pequeña escala. Este economicismo privó a los pueblos aymara, quechua y guaraní de su profunda y antigua identidad. La nueva crítica –explícitamente planteada por Álvaro García Linera, actual vicepresidente de Bolivia– hizo posible la construcción de un nuevo sujeto político: el movimiento indígena. En alianza con otras fuerzas sociales, el movimiento fundó el MAS – Movimiento al Socialismo– con el fin de unir las fuerzas acumuladas desde 2000 para lograr una acción eficaz en la esfera política y la hegemonía a escala nacional mediante la candidatura y la presidencia de Evo Morales.

Desde 2000 y en ruta hacia la elección de Evo Morales seis años más tarde, el activismo militante de los movimientos indígenas cosechó éxitos impidiendo la privatización del servicio de suministro de agua que iba a ser explotado por una compañía francesa, y derrocó a los gobiernos de Sánchez de Lozada y de su vicepresidente Carlos Mesa. Morales fue elegido a partir de una plataforma que prometió nacionalizar los recursos naturales, acometer la reforma agraria y convocar una asamblea constituyente encargada de redefinir Bolivia como un Estado multinacional, multiétnico y multicultural. El movimiento indígena pasó de ocuparse de cuestiones específicas –como el agua– a embarcarse en una lucha contra el Gobierno nacional, en la creación de un partido enraizado en los movimientos sociales y, finalmente, en la construcción de un proyecto alternativo antineoliberal para Bolivia que debería ser implementado por un Estado refundado a partir de nuevas líneas.

Acontecimientos similares tuvieron lugar en Ecuador, donde la resistencia al neoliberalismo protagonizada por los movimientos indígenas derrocó a dos gobiernos. Movimientos como Pachakutik y CONAIE depositaron entonces

su confianza en un militar, Lucio Gutiérrez, que había desempeñado cierto papel en la caída del segundo gobierno y participado en el Foro Social de Porto Alegre; en su gabinete se sentaron diversos indígenas. Pero antes de tomar posesión del cargo, Gutiérrez viajó a Washington para firmar determinados acuerdos con la Administración Bush, traicionando sus promesas electorales sobre política económica y la base militar de Manta, en donde se estacionaban las tropas estadounidenses. Los movimientos indígenas le retiraron su apoyo y salieron del gobierno, pero se mostraron divididos. Algunos de sus líderes permanecieron leales a Gutiérrez hasta el fin, y las fuerzas indígenas fueron tan debilitadas por el proceso que desempeñaron un papel escaso en los levantamientos de 2005 que provocaron la caída de aquél, obra fundamentalmente de movimientos urbanos.

Durante las elecciones presidenciales de 2006, la izquierda fue representada por Rafael Correa, un joven economista cristiano que había participado brevemente como vicepresidente en el gobierno de Gutiérrez y que organizó su campaña en torno a una plataforma antineoliberal que se presentaba a sí misma como la continuación de todo el abanico de movilizaciones de base de los últimos años. En un primer momento, los movimientos indígenas no se mostraron implicados, desconfiados de la participación institucional tras sus experiencias en la asamblea constituyente y en el gobierno de Gutiérrez. Cuando finalmente presentaron a su propio candidato en la persona de su líder Luis Macas, el espacio de la izquierda ya estaba ocupado por Correa y sus seguidores predominantemente urbanos, si bien Correa también atrajo el apoyo de la población indígena. El movimiento en Ecuador fue incapaz de superar el dilema entre la «autonomía de lo social» y la necesidad de reconectarse con la esfera política, permaneciendo dividido entre tres opciones: la forma tradicional de apoyo y participación en los gobiernos, la retirada de la lucha política institucional y la presentación tardía de un candidato contundente pero aislado que obtuvo únicamente el 2 por 100 de los votos. De este modo, un movimiento con una extraordinaria historia no logró pasar de una senda de pura resistencia a la de construcción de alternativas, encontrándose excluido cuando llegó el momento de planificar el posneoliberalismo.

En Bolivia, por el contrario, los movimientos indígenas intentaron también efectuar esta transición. La fundación del MAS y la candidatura de su líder Evo Morales expresaban un nuevo modo de vincular los movimientos sociales a la esfera política. Evo continuó como presidente de la Federación de Cultivadores de Coca de Cochabamba, su provincia natal, al mismo tiempo que se convertía en el principal candidato de la izquierda boliviana y ganaba las elecciones a presidente de la República. Este hecho supone un logro sin precedentes en la historia de la izquierda latinoamericana y más específicamente en la historia de las luchas antineoliberales y posneoliberales.

Los *piqueteros* de Argentina ilustran también el dilema al que se enfrentan los nuevos movimientos. Estos grupos alcanzaron notoriedad durante la cri-

sis terminal de la paridad peso-dólar –un ejemplo extremo y radical de neoliberalismo financiero– organizando demostraciones de masas y bloqueos de carreteras, que atrajeron a gran número de personas empobrecidas por los efectos de la paridad monetaria. Se produjeron también innumerables ocupaciones de fábricas en las que los trabajadores rescataron exitosamente las empresas que habían sido abandonadas o cerradas por sus propietarios. Este primer conflicto con el gobierno de De la Rúa –que había heredado la política de paridad del gobierno de Menem, la cual mantuvo hasta que le estalló entre las manos– señaló el inicio de la crisis más profunda que jamás había arrostrado el Estado argentino. En diciembre de 2001, tras duras manifestaciones contra su gobierno, De la Rúa huyó de la Casa Rosada en helicóptero. Durante los días siguientes, varios presidentes juraron su cargo y fueron expulsados del mismo. La bancarrota del modelo económico era obvia, y la posibilidad de un gobierno no neoliberal fue abiertamente discutida. Cuando se convocaron nuevas elecciones, Carlos Menem se presentó con una propuesta todavía más radical: la completa dolarización de la economía. Ello hubiera implicado separar al país de los procesos de integración regional, que podrían no haberse recuperado de tal golpe y que se hubieran visto negativamente afectados por el plan de Menem de estimular las ambiciones pro libre comercio de Estados Unidos mediante la firma de un tratado bilateral entre los dos países.

Enfrentados a esta crisis de hegemonía de los partidos tradicionales –el Partido Radical en desbandada tras la dimisión de De la Rúa, los peronistas profundamente divididos–, los movimientos sociales acuñaron el famoso eslogan *¡Que se vayan todos!* Ello equivalía a un rechazo a tomar parte en el proceso electoral, pero sin sugerir, sin embargo, modo alguno en el que el poder podría ser repensado y reorganizado. Suponía la expresión por excelencia de la «autonomía de los movimientos sociales», desdeñosos de la política pero carentes de cualquier alternativa. Desde una posición de fuerza, se puede, en realidad, prescindir de «una buena parte de ellos». Sin fuerzas políticas organizadas, el eslogan es meramente un modo de retirarse de la lucha por una hegemonía alternativa. En el caso argentino, esto permitió a Menem ganar la primera ronda electoral de 2002 y a un relativamente oscuro gobernador provincial, Néstor Kirchner, ganar la segunda. Kirchner intentó presentar, desde dentro del peronismo, la imagen de una alternativa moderada a Menem en la estela de Lula o Tabaré Vázquez. De este modo se superó la crisis de hegemonía. Kirchner capitalizó la furia de las calles y el desprecio por los gobiernos de Menem y de De la Rúa. Desde una posición de centro-izquierda, acometió la tarea de reparar las grietas presentes en la legitimidad del Estado y de ganarse a diversos sectores de los *piqueteros*, cuyas secciones más radicales se vieron así aisladas y debilitadas.

En todos estos casos, la noción de autonomía de los movimientos sociales no sirvió para propiciar el reagrupamiento de las fuerzas de masas dirigido a organizar nuevas formas de acción política, ni como modo de construir formas alternativas de poder, sino, por el contrario, como un rechazo a en-

frentarse al problema del poder. Las exposiciones teóricas más claras de tales tendencias pueden encontrarse en los trabajos de Toni Negri y John Holloway. Ambos defienden explícitamente el abandono del poder, de la esfera política, aduciendo que el poder lo corrompe todo, dado que sus formas de representar la voluntad popular son intrínsecamente perversas y distorsionadoras; la voluntad del pueblo sólo puede ser legítimamente representada en el seno de la esfera social. Además, Negri describe el Estado como un freno conservador de la globalización. Sin embargo, ninguno de estos autores efectúa un intento de construir estrategias antineoliberales concretas; sus prescripciones conducen únicamente a la inercia de los movimientos sociales. Los FSM, por su parte, convirtieron la necesidad de regular los flujos del capital financiero en una de sus tesis fundadoras; esto, sin embargo, tan sólo puede ser realidad –como, por ejemplo, en el caso de Venezuela– mediante la acción estatal.

Otro planteamiento para enfrentarse a la crisis de hegemonía que asedia a América Latina –caracterizada por el agotamiento del modelo neoliberal pero la continuación de las políticas de libre comercio– podemos encontrarlo en el zapatismo. Este movimiento nació de las demandas de los grupos indígenas de Chiapas y disfrutó de un alto perfil nacional durante un tiempo, pero quedó confinado al sudeste de México y a las demandas de un sector particular. En vez de aprovecharse de la crisis del PRI, los zapatistas no tomaron parte en la contienda institucional, la cual condenaban, y así el PAN cubrió el hueco como otra opción de derechas. Tampoco participaron en las elecciones presidenciales de 2006, prefiriendo organizar «La otra campaña», paralela a la campaña oficial, que se convirtió en una ocasión para arrojar más veneno sobre el candidato convencional de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador del PRD, que sobre sus rivales. Una vez más el ganador fue el PAN, si bien logró su triunfo por un reducidísimo margen y en medio de acusaciones bien fundadas de fraude. Felipe Calderón ha continuado con las políticas neoliberales de su predecesor. Ha desafiado también el monopolio petrolífero con un proyecto que prepara las cosas para la privatización de PEMEX, al tiempo que ha reprimido duramente la protesta popular.

Inflexiones de centro-izquierda

Una ulterior respuesta a la crisis de hegemonía es la de la izquierda tradicional representada por gobiernos como los de Lula, Kirchner, Vázquez u Ortega, que disfrutaron de cierto apoyo crítico por parte de los movimientos sociales en sus respectivos países: sindicatos, movimientos rurales, empleados del sector público en la sanidad o la educación. Estos gobiernos mantienen el modelo neoliberal, pero intentan desarrollar políticas sociales más flexibles –fundamentalmente en Brasil, pero también en Argentina, Uruguay y Nicaragua– que los distinguen de las administraciones neoliberales ortodoxas. Sus políticas exteriores, por otro lado, se hallan firmemente comprometidas con la integración regional, haciendo especial

hincapié en Mercosur y en el más recientemente creado Unasur, anteponiendo ésta a los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Éste es el asunto fundamental que divide América Latina hoy: la línea que separa países como Chile, México, Perú o Costa Rica, que han firmado acuerdos de este tipo, de otros como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua o Cuba, que se hallan más interesados en la integración regional. Se trata de una distinción completamente diferente de la que distingue entre un centro-izquierda «bueno» o «moderado» y una izquierda «mala» o «radical», tan del gusto de los medios de comunicación occidentales, formulada por figuras como Jorge Castañeda, portavoz de la derecha latinoamericana, con el fin de dividir a la izquierda, cooptar a los moderados y aislar a los radicales. Esta distinción es reiterada una y otra vez por el editor de *The Economist* en América Latina, Michel Reid, que lanza sus truenos contra las alternativas de izquierda al neoliberalismo en su libro *Forgotten Continent* (2007).

Entretanto, cuatro gobiernos latinoamericanos han dado un paso más en el proceso de integración regional, que pretende romper con el modelo dominante y comenzar la construcción de lo que podríamos denominar la alternativa posliberal. Venezuela, Bolivia, Ecuador y Cuba se hallan comprometidos –Ecuador hasta ahora de modo no oficial– en la construcción de la Alternativa Bolivariana para las Américas, cuyo proceso de integración es mucho más ambicioso; en estos momentos, incluye también a Haití, Nicaragua y Honduras. El ALBA ha intentado combatir el modelo neoliberal mediante la creación de espacios desmercantizados y promoviendo lo que el Foro Social Mundial denomina «comercio justo», esto es, intercambios no gobernados por criterios de mercado o las normas de la OMC sobre el libre comercio. Este experimento es único por su implementación de modelos alternativos de intercambio, que prefiguran lo que podría significar ese «Otro mundo es posible». Aquí, cada país da de acuerdo con lo que tiene y recibe de acuerdo con sus necesidades. Así, los dos países fundadores del ALBA, Venezuela y Cuba, intercambian el petróleo del primero por los conocimientos especializados del segundo en los ámbitos de la educación, la salud pública y el deporte, en línea con sus respectivas necesidades y posibilidades. Gracias a estas transacciones, Venezuela se ha convertido en el segundo país en América Latina en proclamarse «territorio libre de analfabetismo», de acuerdo con los criterios de Naciones Unidas. Este logro se obtuvo en un espacio público desmercantizado, no bajo condiciones de mercado o sujeto a los presupuestos de educación de los gobiernos tradicionales, incluidos entre estos últimos los de países más desarrollados como Argentina, México o Brasil; y ello no fue el producto de un método de alfabetización altamente desarrollado por el gobierno como el del brasileño Paolo Freire.

Bolivia ha anunciado que a finales de 2008 espera unirse a Venezuela y Cuba como territorio libre de analfabetismo, gracias una vez más a la contribución directa de los especialistas cubanos. Otros éxitos incluyen la «Operación Milagro», un proyecto que ha devuelto la visión a cientos de

miles de latinoamericanos –y también, de hecho, de norteamericanos– mediante operaciones gratuitas en Cuba, Venezuela y Bolivia; en este último país, por ejemplo, miles de argentinos se han beneficiado de tal programa. Mientras, la Escuela Latinoamericana de Medicina está formando gratuitamente a la primera generación de doctores de orígenes humildes, incluida Norteamérica. Venezuela está utilizando sus ingresos petroleros para construir un espacio de intercambios solidarios –Petrocaribe– que ayuda a financiar sectores pobres en Estados Unidos, de modo similar a como el ALBA gestiona programas de solidaridad en Haití, Bolivia, Nicaragua y otras partes del continente. Los proyectos de integración regional, como el programa del Banco del Sur, el gaseoducto transcontinental y Tellesur, constituyen otros intentos de alterar la relación de la región con el mercado mundial, mediante la dedicación de recursos financieros y mercancías al logro de sus propios objetivos.

Estados de vanguardia

¿Por qué no ha emergido un desafío en toda regla al capitalismo? La respuesta debe buscarse en el equilibrio global de fuerzas tras la victoria de Occidente en la Guerra Fría. Los intensos procesos de desregulación y mercantilización que este hecho produjo no generaron un era de crecimiento económico sostenido; por el contrario, la inversión productiva fue en gran parte transferida a la esfera financiera especulativa. La concentración social y geográfica de la riqueza se ha intensificado. Los límites y contradicciones del sistema capitalista se revelan a una escala mayor que nunca antes. Sin embargo, los factores subjetivos –formas de organización colectiva y de conciencia, de la política y del Estado– necesarios para la construcción de alternativas han sido descabalados en el curso de estos mismos procesos. El Estado y el dominio público se han debilitado ante el asalto del capital rentista, respaldado por las agencias internacionales que incansablemente alaban la doctrina del libre comercio. Ideológicamente, el triunfo del liberalismo ha impuesto su propia interpretación del mundo como un monopolio hegemónico: democracia no puede significar sino parlamentarismo representativo; la economía únicamente puede significar economía capitalista de mercado; el cliente y el consumidor eclipsan al ciudadano y al trabajador; la competencia reemplaza a los derechos y el mercado subsume la esfera pública.

Por todo ello, las sucesivas crisis del modelo económico neoliberal no han provocado un desafío abierto al capitalismo como tal. En América Latina, los países que han ido más lejos en el combate contra el neoliberalismo son aquéllos en los que éste había penetrado menos. En Venezuela, el avance de las políticas de libre mercado sufrió un revés por los fracasos de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera; en Ecuador, por la caída de tres gobiernos consecutivos. En Bolivia, las comunidades indígenas lograron preservar sus identidades no sólo en las zonas rurales, sino también en los distritos urbanos –ciudades como La Paz, El Alto y Cochabamba–,

donde se hallaban masivamente concentradas. Ideológicamente, el neoliberalismo ha echado raíces más profundas en los países relativamente más desarrollados: México, Brasil, Chile, Argentina. Brasil ha estado gobernado por una serie ininterrumpida de gobiernos neoliberales durante diez años; en Argentina, Menem también gobernó durante idéntico periodo, mientras que en México la ortodoxia neoliberal fue exhaustivamente implementada bajo la égida del PRI y del PAN. En Brasil y Argentina, el modelo neoliberal continúa vigente, a pesar de ciertas áreas de flexibilidad.

Los gobiernos que, por analogía con el poscapitalismo, podrían denominarse «posliberales» –los de Venezuela, Ecuador y Bolivia– no emergieron en ninguno de los bastiones clásicos de la izquierda latinoamericana como Brasil, Chile, Argentina o Uruguay. No aparecieron en países en los que la clase obrera y los movimientos de los trabajadores habían ganado una posición más sólida gracias a los avances de la industrialización y las experiencias históricas de la izquierda política. Emergieron como nuevos sujetos históricos, forjados en las luchas contra la privatización y en las protestas populares contra los costes sociales del neoliberalismo. En Bolivia, este sujeto es claramente el movimiento indígena, que surge tras la desaparición del movimiento de los mineros. En Venezuela encontramos un movimiento nacionalista antiimperialista que tiene orígenes militares. En Ecuador se trata de un sujeto híbrido, suma de varios contingentes formados por grandes olas de movilización popular, desde los movimientos indígenas a las campañas democráticas urbanas, que incorpora a muchos otros sectores en su camino, incluidos sindicalistas, estudiantes y miembros de la *intelligentsia* crítica.

Todas estas fuerzas son antineoliberales, pero no necesariamente anticapitalistas, si bien podrían convertirse en tales, dependiendo de la capacidad de sus dirigentes políticos para encauzar la lucha en esa dirección a la hora de dotar de una dinámica anticapitalista a la alianza antineoliberal. El proyecto de socialismo del siglo XXI lanzado por Hugo Chávez y desarrollado por innumerables otras fuerzas es, después de todo, un constructo histórico sin precedentes que intenta fusionar la lucha antineoliberal con la anticapitalista. Los procesos políticos más avanzados en América Latina –y, en cierto sentido, en todo el mundo, considerando que es aquí donde el proyecto ha ido más lejos– están intentando diseñar proyectos políticos que pueden ser llamados posliberales. Utilizamos este término para indicar planteamientos que combinan la restauración de diversas funciones estatales: su capacidad reguladora para defender la soberanía nacional sobre los recursos naturales; su poder para implementar políticas socialmente inclusivas como representante de la gran masa trabajadora de la sociedad; su determinación de crear nuevos mecanismos de participación política y de redefinir los vínculos entre lo social y lo político. En tales economías, este Estado redefinido ejercerá su hegemonía, pero cohabitando con un apreciable sector privado, mientras que las propiedades socializadas pueden asumir diversas formas: cooperativas, pequeñas empresas familiares, etc. El objetivo es crear un nuevo modelo de socialización refundando el Estado en torno a la esfera pública, teniendo pre-

sente que la idea del socialismo del siglo XXI significa la rehabilitación del dominio público, la universalización de los derechos y una desmercantilización exhaustiva. El éxito de todo ello dependerá del grado de desmercantilización logrado en el modelo posneoliberal.

Desafíos

Tras un periodo de euforia, es posible discernir los signos de una inminente nueva fase que estos gobiernos deben prepararse para arrostrar. El triunfo de Fernando Lugo en Paraguay –que ha puesto fin a décadas de gobierno dictatorial por un régimen de partido-Estado– se ha añadido a la lista de gobiernos de nuevo tipo en la región. Lugo se halla respaldado por una heterogénea alianza de partidos, pero tiene un amplio apoyo social, especialmente en las zonas rurales, que proporcionará al nuevo presidente una legitimación sustancial cuando se enfrente a una serie de problemas difíciles: la reforma agraria, la corrupción, la reforma fiscal y el reconocimiento de tratados sobre la energía hidroeléctrica con Brasil (Itaipú) y Argentina (Yacyretá). En El Salvador existen pronósticos favorables para que el candidato del Frente Farabundo Martí, Mauricio Funes, se convierta en presidente en marzo de 2009. Sin embargo, estos hechos han coincidido con el surgimiento de nuevos obstáculos. La derrota de Chávez en el referéndum de noviembre de 2007 y las previsibles dificultades que encontrará para ganar las elecciones de noviembre de 2008 contra una oposición unida sugieren que podrían infligirse cuantiosas pérdidas sobre un gobierno que hasta ahora ha administrado casi todos los gobiernos locales, si bien algunos por defecto, dado el boicot de la oposición. A pesar de la victoria de Morales en el referéndum de agosto de 2008 –68 por 100, con una participación del 84 por 100–, los problemas que asedian al gobierno boliviano siguen ahí; las negociaciones tendrán que ser retomadas en un intento de resolver los espinosos problemas de la nueva constitución. Sin embargo, el apoyo popular hacia estos gobiernos es sustancialmente mayor que el que recogen los medios de comunicación; en este último referéndum, por ejemplo, Morales obtuvo un 14 por 100 de apoyo más que en las elecciones presidenciales de 2006.

En cuanto a Lula, aunque la crisis provocada por las acusaciones de corrupción no se ha disipado completamente, ha logrado ganar un segundo mandato y todavía disfruta de tasas de aprobación del 70 por 100. Esta popularidad es la recompensa a una continua expansión económica, pero fundamentalmente se debe a los apreciables efectos de las políticas sociales del gobierno, lo cual sugiere que será difícil encontrar un candidato para suceder a Lula en 2010. Tabaré Vázquez debería encontrar más fácilmente un sucesor, aunque el Frente Amplio se halle dividido entre aquellos que apoyan a su canciller moderado, Danilo Astori –tachado por la izquierda de neoliberal, pero alabado por Tabaré por la estabilidad económica que ha logrado–, y aquellos que prefieren un candidato más izquierdista, que sería con toda probabilidad el ex tupamaro José Mujica.

Como Morales y Chávez, Cristina Fernández ha estado expuesta a un fiero ataque desde la derecha. Su intento de elevar los aranceles sobre las exportaciones agrícolas —el sector dominante del comercio exterior argentino, sobre todo la soja transgénica— provocó furiosas protestas entre los productores rurales, grandes, medianos y pequeños, debido a la desastrosa incapacidad del impuesto a la hora de discriminar entre ellos. Tras sustituir en el poder a su marido Néstor Kirchner en abril de 2008, la popularidad de la presidenta se hundió abismalmente durante los primeros meses de su mandato, cuando la tradicional oposición urbana de clase media — que se halla concentrada en Buenos Aires y que fue prácticamente el único grupo que la rechazó en las urnas— unió sus fuerzas a la de los productores de carne y grano en su campaña de bloqueo de carreteras y cierres patronales.

Cuba está comenzando a relajar las rígidas políticas que se vio obligada a introducir para superar el «periodo especial». Estas reformas no son el efecto de la retirada de Fidel Castro del puesto de mando; reflejan los deseos populares que han sido reprimidos desde que la nación tuvo que apretarse el cinturón tras el colapso del sistema de planificación colectiva a largo plazo del campo socialista. La primera reordenación del gobierno no trajo a la palestra a políticos más jóvenes; por el contrario, la vieja guardia se vio reafianzada como indicando que las reformas se llevarían a cabo únicamente en el seno del marco ideológico de la Revolución. Sin embargo, el congreso del Partido previsto para 2009 debe ser una oportunidad para renovar el equipo dirigente, apuntando así a la posible forma que adquirirá Cuba tras la marcha de Fidel, cincuenta años después de la victoria revolucionaria de 1959 que cambió la historia de la izquierda latinoamericana.

Controversias hegemónicas

¿Qué tipo de lugar será América Latina tras esta ola de gobiernos progresistas? ¿Qué grado de irreversibilidad presentan los cambios actuales? ¿En qué tipo de regresión infinita podría enredarse si el actual proceso político no logra ser asegurado? Las estrategias contraneoliberales —en la única forma posible que pueden asumir, dado el equilibrio de poder a escala global, regional y nacional— implican una lucha prolongada por la hegemonía: ni una alianza desigual con los sectores burgueses dominantes (la estrategia reformista), ni la aniquilación del enemigo (la premisa de la lucha armada). Por el contrario, estas estrategias suponen replantear la lucha por la hegemonía en términos de conquista del poder, incluyendo la legislación necesaria para revertir los procesos de mercantilización y dotar de más poder a los sujetos sociales para que se reconstituyan «por sí mismos». Más allá de esto, en una etapa superior, ello significa la fundación de un nuevo Estado, capaz de materializar el nuevo equilibrio de poder entre los bloques sociales fundamentales.

En Bolivia, por ejemplo, la conquista del poder mediante las urnas fue lograda tras una de las apuestas más consistentes para dismantelar el Estado nunca vistas en el continente, la cual comenzó con la liquidación de las minas de estaño y culminó con la privatización –capitalización en el lenguaje del neoliberalismo boliviano– de las principales empresas públicas, la rescisión del control estatal sobre los recursos naturales y la paralización del poder del gobierno para imponer forma alguna de regulación. Ésta fue la situación heredada por el gobierno de Morales, que sin vacilaciones comenzó a implementar su programa estratégico: nacionalización de los recursos naturales, empezando de modo más urgente por el gas; convocatoria de una Asamblea constituyente; y primeros pasos hacia la reforma agraria. El programa de nacionalización no pudo prescindir de la colaboración con las empresas extranjeras, porque el Estado no podía soportar la carga inversora y la compañía del gas boliviana se habría visto privada de sus gestores y técnicos más cualificados. Lo mejor que pudo hacer el gobierno fue elevar los impuestos por exportación de gas del 18 al 84 por 100, creando de este modo un fondo crucial para cubrir el grueso del gasto público en programas sociales, que se hallan dirigidos fundamentalmente a niños y ancianos.

En lo que atañe a la Asamblea constituyente, el gobierno había previsto originalmente la representación directa de los pueblos indígenas y de todos los movimientos sociales, excluyendo, sin embargo, a los partidos políticos, lo cual le habría otorgado una aplastante victoria contra la oposición. Pero Bolivia no es Venezuela, donde el Estado es fuerte –tan fuerte que fue capaz de retomar el control de la compañía petrolífera nacional– y el sector empresarial relativamente débil, de modo que sus intentos de boicot político se apagaron fácilmente y no tuvieron repercusiones económicas más allá de situaciones de escasez limitadas y de la inflación. En Bolivia, el poder económico se halla abrumadoramente en manos privadas y se concentra en las provincias orientales, que constituyen el feudo de la derecha. Había razones para temer que la oposición, enfrentada a la perspectiva de una derrota en toda regla, pudiera lanzar un perjudicial boicot económico contra el gobierno que hubiera intensificado el riesgo de rotura del país. Así pues, la Asamblea se estructuró finalmente en torno a los partidos existentes, lo cual concedió al gobierno la mayoría absoluta pero no los dos tercios necesarios para legitimar su proyecto constitucional. La oposición presentó un frente común esperando que colapsara la Asamblea constituyente. Multiplicando las obstrucciones, a la postre precipitó una crisis institucional que intentó capitalizar exigiendo la convocatoria de un referéndum sobre la cuestión de la autonomía, no para los pueblos indígenas, como pretendía el MAS, sino para los gobiernos provinciales. Ello les permitiría bloquear la reforma agraria en sus provincias así como embolsarse una proporción sustancial de los ingresos generados por la exportación de gas. De ahí que la oposición interpretase la «autonomía» como aplicable únicamente a los dirigentes provinciales, que por primera vez en la historia boliviana han sido elegidos por los residentes de las prefecturas en vez de ser nombrados por el presidente, como sucedía hasta 2007.

Ante una estrategia basada en la acumulación de fuerzas mediante la movilización social, de modo que pudiera rectificarse el equilibrio de fuerzas y se conquistase una nueva hegemonía, el gobierno estaba ansioso de evitar confrontaciones violentas y levantamientos armados, ya que éstos podrían provocar que el conflicto se transformase en terreno favorable para la derecha, que podría contar con el apoyo de la policía y de las fuerzas armadas en el interior y de Estados Unidos desde el exterior. La táctica consistió, pues, en atraer a la oposición a la Asamblea y utilizar este foro para consolidar la nueva hegemonía. La derecha, viendo sus intereses severamente amenazados, reaccionó furiosamente –se produjeron intentos separatistas, ataques violentos, brotes racistas– en un contexto que no les favorecía, dado que la tendencia general apuntaba hacia políticas en pro de un nuevo modelo económico que concediera menos importancia a las exportaciones, particularmente de soja transgénica, que tan lucrativa resulta para los ricos agricultores-empresarios de Santa Cruz de la Sierra.

Este ejemplo muestra el despliegue de maniobras en una larga guerra de posiciones enrocadas, una guerra que la izquierda de estos países está combatiendo en el ámbito gubernamental, con amplios mandatos populares y un gran margen de iniciativa, incluso cuando se enfrenta al poder económico y mediático de la oposición. Ninguna de las conquistas obtenidas es irreversible. Sin embargo, los retrocesos experimentados por la derecha con el aislamiento y la caída de los gobiernos más ortodoxamente neoliberales nos permiten suponer que, si vuelve al poder desplazando a la izquierda y al centro-izquierda actuales, lo hará con toda seguridad manteniendo algunos de los programas sociales de los gobiernos hoy en el poder o bien optará por implementar versiones propias de los mismos, algo que era impensable con anterioridad. Sin duda, no obstante, la derecha relanzará el programa de privatización, detendrá el proceso de integración regional e intentará una reaproximación a Estados Unidos y el Norte en su conjunto. Las únicas alternativas a los gobiernos progresistas ahora en el poder, incluidos los más moderados, radican a la derecha de los mismos: la izquierda, dada su situación actual, no presenta en ninguna parte un nivel lo suficientemente alto de fuerza o de apoyo, o un discurso alternativo suficientemente claro.

Algunos proyectos de alcance regional serán muy difíciles de revertir si avanzan lo suficiente de la mano de los gobiernos actuales: el gasoducto continental o el Banco del Sur, por ejemplo. Existe un apoyo popular a la izquierda en muchos países del continente que excede lo que éste ha conocido nunca. Ello se debe a las políticas sociales que tanto contrastan con las de los gobiernos neoliberales. Este apoyo ha demostrado que supera todo el poder económico y mediático de las elites en un escenario que se ha repetido en las elecciones celebradas en toda América Latina. Se trate de radicales como Chávez, Correa y Morales, o de moderados como Lula, Vázquez, Néstor y Cristina Kirchner, Ortega, Lugo y López Obrador,

estos candidatos fueron todos ellos combatidos por un bloque neoliberal, impulsado por el poderoso monopolio privado de los medios de comunicación. Este monopolio «produce consenso», conformando la opinión pública día a día y determinando los temas objeto de discusión pública. Y sin embargo, cuando llegan las consultas electorales, la gente, en Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Uruguay, ha votado en dirección contraria a sus pautas.

Reverberaciones

¿Qué impacto podrían tener los acontecimientos registrados en América Latina en el resto del mundo? Podemos examinar la cuestión respecto a los tres grandes pilares del poder contemporáneo: el poder de las armas, el poder del dinero y el poder de las palabras. Claramente, América Latina puede tener poco impacto sobre la situación económica global, más allá de las alianzas con China, Rusia y Sudáfrica que especialmente ha forjado Brasil. El crecimiento de los intercambios Sur-Sur derivado de la integración regional –fundamentalmente con China e India, pero también con Irán– supone un paso hacia un nuevo modelo de relaciones comerciales internacionales en las que Estados Unidos pesa menos que antes, excepto respecto a los países que han firmado acuerdos de libre comercio bilaterales. Igualmente, sobre la cuestión de las armas, parece improbable que América Latina pueda hacer algo más que desempeñar un papel pasivo, rechazando los planes expansionistas del imperio estadounidense, como hizo cuando Washington no logró cosechar ni un solo voto, ni siquiera de sus estrechos aliados económicos México y Chile, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en apoyo de la invasión de Iraq. El aislamiento de Colombia, el epicentro de la influencia estadounidense, se hizo patente cuando su reciente incursión en territorio ecuatoriano fue condenada por todas y cada una de las naciones latinoamericanas así como por la OEA. Los proyectos de integración regional únicos de América Latina ofrecen una senda a una independencia relativa de Estados Unidos, que se combina con una alternativa a los acuerdos de libre comercio propugnados por Washington. También en este caso encontramos un reducido número de gobiernos en el mundo que desafían abiertamente la hegemonía imperial norteamericana: Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador.

Nada de esto basta, obviamente, para construir un contrapeso a Estados Unidos. En la mejor de las hipótesis, el continente está resistiendo y elaborando sus nuevas formas de integración en una región cuya relevancia económica ha disminuido enormemente por los efectos de la desindustrialización provocada por la apertura económica forzada por el neoliberalismo. La fundación en mayo de 2008 de Unasur, un proyecto de integración de todos los países de América del Sur, y la propuesta de un Consejo de Defensa Sudamericano, iniciativas ambas lanzadas al margen de Estados Unidos, apuntan hacia un nuevo espacio y un nuevo modelo

de integración continental; la participación formal de Colombia, sin embargo, complica las cosas, dado que Uribe ha decidido permitir que Estados Unidos establezca una base militar permanente en territorio colombiano.

La importancia de la región en su conjunto deriva de sus recursos energéticos, fundamentalmente petróleo, y de sus exportaciones de productos agrícolas, fundamentalmente soja. Pero los mercados domésticos se están haciendo más atractivos a medida que se incrementa su capacidad de consumo, al tiempo que la integración regional fortalece el vigor de la negociación política, como se ha podido comprobar en las negociaciones del G20 con la OMC. El proceso de ruptura con el modelo neoliberal y de constitución de espacios alternativos para el comercio, como el ALBA, ha convertido el continente en una referencia indispensable en todo debate en torno a las alternativas al neoliberalismo. En parte por estas razones, el liderazgo de Chávez ha sido celebrado más allá de las fronteras del continente. Sin embargo, uno de los aspectos más vulnerables del proceso posneoliberal es su aislamiento global: en ausencia de otros aliados, Venezuela se ha visto forzada a cultivar a cualquier gobierno que se halle en conflicto con Estados Unidos, como ha sucedido con Rusia, Irán, Bielorrusia y China. Además, los países latinoamericanos que han dado pasos concretos para romper con el modelo no son los más desarrollados, relativamente hablando; su mayor activo económico es poder contar con el petróleo venezolano.

En el ámbito ideológico, América Latina se halla mejor colocada para plantear los problemas objeto de debate: el Estado plurinacional y pluriétnico; la noción de socialismo del siglo XXI; las fórmulas alternativas para la integración regional como el ALBA. Pero existen pocas plataformas para diseminar las nuevas ideas, para oponerlas al *pensée unique* y sus teorías, incesantemente propagadas por los medios de comunicación. El pensamiento crítico latinoamericano, que puede vanagloriarse de una larga tradición de interpretaciones perspicaces y anticipatorias así como de innovaciones teóricas, se enfrenta a desafíos novedosos al intentar dar respuesta a problemas como el nuevo nacionalismo, los pueblos indígenas, el nuevo modelo de acumulación, los procesos de socialización y desmercantilización, y el futuro histórico y político del continente. En algunos países, fundamentalmente Bolivia, los experimentos en curso se hallan acompañados por ricos procesos de reflexión y de elaboración teórica. En otros, existe una disociación considerable, por no decir contradicción, entre buena parte de la *intelligentsia* y el proceso en el que se halla embarcado el resto del país: su ejemplo más conspicuo es Venezuela. En países con una fuerte *intelligentsia* radicada en la universidad, como Brasil, Argentina y México, una parte significativa de la elite cultivada no se compromete a participar en las principales áreas de lucha social y política, aunque mantiene un alto grado de elaboración intelectual. El potencial teórico existente puede desempeñar un importante papel en la construcción de modelos posneoliberales.

Contexto mundial

Retrospectivamente, el surgimiento, consolidación y crisis del neoliberalismo conoce tres fases distintas. La primera estuvo marcada por el tandem Thatcher-Reagan y corresponde a las expresiones ideológicas más robustas y más abiertamente reaccionarias, con Pinochet en Chile y Jeffrey Sachs en Bolivia como sus más auténticos equivalentes regionales. La segunda fase corresponde a los gobiernos denominados de la Tercera Vía, representados por Clinton y Blair, que siguieron una supuesta versión «blanda», una consolidación del modelo, dado que las intervenciones duras –privatizaciones, predominio ilimitado del mercado, apertura de la economía– ya habían sido realizadas. Parecía que en ese momento se hubiera encendido la luz verde para que gobiernos de tendencia similar en América Latina –socialdemócratas y nacionalistas– se dispusieran a seguir la misma senda: de Buenos Aires a Ciudad de México, el Consenso de Washington barrió el continente. La tercera fase se inauguró con la crisis del peso mexicano y el inicio de la turbulencia en la economía globalizada, al tiempo que la Casa Blanca de Bush-Cheney imponía un tono más duro y más conservador en respuesta a los ataques de 2001; políticas agresivas impuestas por Washington en un contexto de estancamiento económico.

Éste fue el entorno en el que se produjo a finales de la década de 1990 y principios de 2000 la caída consecutiva de los gobiernos neoliberales en América Latina. Los líderes que accedieron al poder en ese momento aprovecharon el relativo debilitamiento económico y político del liderazgo estadounidense para hacer impracticable el ALCA y para comenzar a desarrollar políticas alternativas tendentes a la integración regional. Esta fase también corresponde al declive de la preponderancia internacional de la economía estadounidense y a la creciente demanda de China e India sobre el mercado mundial. La RPCh, en particular, estableció intercambios directos a gran escala con muchos países de la región.

¿Qué podría aportar una cuarta fase? Si algunos gobiernos han experimentado dificultades recientemente –en particular, Venezuela, Bolivia y Argentina–, los acontecimientos mundiales están introduciendo nuevos cambios. La subida de los precios de los productos y el impacto internacional de la recesión estadounidense son favorables para la exportación de los productos primarios latinoamericanos, entre los que la agricultura desempeña todavía un importante papel.

Una nueva Administración demócrata en Estados Unidos en 2009 podría intentar cambiar de discurso y romper con el aislamiento sin precedentes al que Washington se enfrenta en la región. Ello representaría un nuevo desafío para el proceso regional de integración y la construcción de un modelo posneoliberal. Es posible contemplar un nuevo impulso a la cooperación por parte de Washington, basado en Colombia y México, sus aliados tradicionales, más el Perú de Alan García, que ha firmado recientemente

un tratado de libre comercio con Estados Unidos; la Casa Blanca, sin embargo, intentará en esta ocasión atraer también a los gobiernos de centro-izquierda –los de Brasil, Argentina y posiblemente Uruguay– para que abandonen el bloque de integración regional, con la intención de aislar a los de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Cuba.

No obstante, otros procesos en curso –entre ellos, Mercosur, ALBA, Unasur, Banco del Sur, el oleoducto continental– pueden avanzar a buen ritmo, dado que la recesión estadounidense favorece la diversificación del comercio regional con países como China, y fortalecer las condiciones para la consolidación de estos gobiernos y de sus proyectos de integración. Queda por ver qué pauta de comportamiento emergerá de la combinación de recesión económica y de Administración demócrata. El desarrollo interno de Venezuela y Bolivia, componentes cruciales del bloque de integración, es fundamental en muchos aspectos para el futuro escenario político de la región, junto con Ecuador, que está avanzando rápidamente mediante la construcción de nuevas instituciones constitucionales, y el nuevo gobierno de Paraguay. En conjunto, sin embargo, es la evolución de México, Argentina y Brasil la que determinará la perspectiva del continente. Si el gobierno de Cristina Fernández tiene éxito en superar su actual crisis y si Lula elige a su sucesor en 2010, impidiendo así que Brasil opte por la vía de los acuerdos comerciales bilaterales y adopte una posición antiintegracionista, entonces existen sólidos indicios de que se producirá una segunda década de gobierno por parte de la nuevas fuerzas regionalistas de América Latina.